

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos, menos uno respecto de los dos primeros puntos, y por mayoría respecto del tercero, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 18 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

JUICIOS DE AMPARO

Promovidos ante el Juzgado 1º de Distrito de México por los Presbíteros D. José Soler, D. Tomás Mas, D. Francisco Barragan, D. Luis Monaco y D. Amadeo Garibaldi, contra la prision á que fueron reducidos por orden del C. Gobernador del Distrito Federal.

VARIOS PEDIMENTOS FISCALES.

Primer Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. José Soler de origen Español y Sacerdoto Católico, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que viviendo

en el Seminario del que es Vice Rector, en ejercicio del derecho que le concede el artículo 4º constitucional, la noche del día 20 del actual fué allanado por la fuerza su domicilio, y encontrándose enfermo, reducido á prision en él, de orden del C. Gobernador.

No habiendo cometido delito alguno que mereciera ese procedimiento, designa como garantías violadas en su persona, las que concede la Constitución en sus artículos 1º, 16 y 18. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado manifestando, que el quejoso fué aprehendido como Jesuita y vivir en comunidad; que este hecho es contrario á la ley de 12 de Julio de 1859, y castigandose con pena corporal, ordenó la prision del quejoso, habiendo dado cuenta al C. Presidente de lo ocurrido para que resolviera lo conveniente. Como en el informe consta que el C. Presidente de la República, usando de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitución ha acordado la expulsión del quejoso; el Juzgado puede decretar, que no hay mérito para el amparo, supuesto que no procede cuando tiene lugar respecto de un extranjero, como confiesa serlo el quejoso. Este punto ha sido considerado por el que suscribe en los diversos amparos promovidos por otros Eclesiásticos extranjeros comprendidos en la Orden de expulsion, y reproduce lo que ha dicho en esos pedimentos, que pide al Juzgado tenga á la vista al dictar su resolución. Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar: que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. José Soler de origen Español.—México, Mayo 31 de 1873 —*Herrera Campos.*

Segundo Pedimento de C. Promotor fiscal.

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Tomás Mas se presentó al juzgado interponiendo recur-

so de amparo, quejándose de que la noche del día 20 del actual fué sacado del colegio Seminario donde se encontraba como catedrático del Establecimiento, y reducido á prision en la diputacion, habiéndole notificado el día 23 que el C. Presidente de la República lo expulsaba del país como extranjero pernicioso, reclamando ambos actos por suponer violadas en su persona las garantías que la Constitución concede en sus artículos 16, 19 y 20; manifestando que vivía en el citado colegio amparado por el artículo 90 de la Constitución, concluyendo con pedir la suspension de la orden de expulsion. Las garantías constitucionales reclamadas se disfrutaban generalmente; pero con la escepcion del caso que nos ocupa. El C. Presidente de la República puede expulsar á los extranjeros perniciosos por solo su calificacion, y para esto no se requiere la sustanciacion de un juicio previo, ni el auxilio de un tribunal; basta su propio juicio, y así se desprende de los terminos en que se le consigno esa facultad en el artículo 33 de la Constitución y de los de la ley de 22 de Febrero de 1832, que usa precisamente de estas palabras: "*cuya permanencia califique perjudicial.*" La palabra "*facultad*" es potestativa y no de otra manera podia concederla la Constitución al C. Presidente de la República, y se la dan no solo las leyes citadas, sino que la implica la autonomía del poder supremo de una nacion respecto á los extranjeros. Además, estos al venir á la República, lo hacen con el conocimiento de que tienen que sujetarse á las leyes vivientes, sin derecho á calificarlas, y esto hace mas obligatoria la observancia.

En cuanto al punto de la suspension del acto reclamado, esta tendria lugar si procediera el juicio de amparo; esto es, si hubiera materia para el amparo. En los casos de expulsion, uno solo hay en que pueda sustanciarse el juicio: cuando se dude de si la persona mandada expulsar es extranjero; mas siéndolo, no cabe este recurso contra los actos del C. Presidente de la Repú-

blica, usando de las facultades que le concede el artículo 33 de la Constitución.

Por lo espuesto, puede el juzgado declarar, que no procede el juicio de amparo en lo principal, ni hay mérito para la suspension del acto reclamado.—México, Mayo 31 de 1873.—*Herrera Campos.*

Tercer Pedimento del C. Promotor fiscal.

El Promotor dice: que el Presbítero D. Francisco Barragan, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que el día 20 en la noche, encontrándose en el colegio del Seminario de donde es catedrático y prefecto, desempeñando las atribuciones de su empleo, fué sacado del colegio y llevado á la cárcel pública sin que el agente de policía que le aprehendió le hubiera presentado la orden escrita de la autoridad, cumpliendo con lo que manda el artículo 16 de la Constitución. Manifiesta, que vivía en el colegio por la causal dicha, amparado por el artículo cuarto de la Constitución que otorga la libertad de enseñanza, y por el noveno que permite las reuniones con objeto lícito. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado manifestando, que al mandar la aprehension del quejoso no se fijó en la profesion de catedrático que ejercía en el colegio, sino en la reunion clandestina de Jesuitas que habia en el Seminario, contraria á la ley de 12 de Julio de 1859, la que se castiga con pena corporal; que él dictó la orden por escrito, que llevaba el policía, y pudo haberselo exigido que la presentara; que de sus procedimientos dió cuenta al C. Presidente para que resolviera lo conveniente. Sin la resolution acordada por el C. Presidente, que mandó expulsar al quejoso fuera de la República, segun aparece de la orden publicada en el Diario Oficial y la trascrita por el C. Gobernador, al informar

en el amparo de D. José Soler, cabría el examen de si el quejoso era ó no infractor de la ley de 12 de Julio de 1859, y si el C. Gobernador obró conforme á esa ley; mas como el C. Presidente de la República ha usado de las facultades que le concede el artículo 33 de la Constitución y ley de 22 de Febrero de 1832, tratándose de un extranjero como confiesa serlo el quejoso; es evidente que no existe violación alguna de garantías constitucionales; por lo mismo puede el Juzgado declarar: que la Justicia federal no ampara ni protege al Presbítero D. Francisco Barragan.

México, Mayo 29 de 1873.—*Herrera Campos.*

Tercer Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor dice: que D. Luis Monaco, sacerdote católico y súbdito Austriaco, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que la noche del día 20 del actual estando cenando en el Colegio Seminario, en union de otros eclesiásticos, fué reducido á prision y llevado á la Diputación sin habérsele mostrado la orden de la autoridad, y sin habérsele dicho el motivo de su prision; violándose en su persona las garantías que concede el artículo 19 de la Constitución. Pedido el informe de la ley al C. Gobernador, lo ha evacuado, manifestando: que el quejoso fué aprehendido como Jesuita y por vivir en comunidad, lo que comprueba el hecho relativo de estar cenando en union de sus compañeros al ser aprehendido; que dictó orden escrita para la aprehension, y que ha dado cuenta de sus procedimientos al Supremo Gobierno para que resuelva lo conveniente. Resulta por el C. Presidente de la República la expulsion del quejoso, no hay méritos de amparo; pues si este podría

reclamarse por actos exclusivos del C. Gobernador, la expulsion ha sido decretada por el C. Presidente de la República en uso de sus facultades Constitucionales, y para esto basta que el quejoso sea extranjero como lo confiesa en su ocurso. Por lo expuesto, puede el juzgado declarar, que la Justicia Federal no ampara ni protege á D. Luis Monaco, súbdito Austriaco.

México, Mayo 29 de 1873.—*Herrera Campos.*

Cuarto Pedimento del C. Promotor fiscal

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Amadeo Garibaldi de origen italiano, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de que el día 21 del actual fué extraído de su domicilio y reducido á prision, violándose en su persona las garantías que le concede la Constitución en sus artículos 4, 13, 16 y 19. Manifiesta, que se le ha notificado que ha sido expulsado fuera del país de orden del C. Presidente de la República, y entra en la apreciación filosófica de los inconvenientes que puede traer el ejercicio de la facultad que concede al C. Presidente de la República el artículo 33 de la Constitución, porque da lugar, entre otras cosas, á que se entronice el despotismo.

Sin entrar en la discusión de si es ó no conveniente el artículo 33 de la Constitución, aunque con facilidad pudiera probarse lo primero, al que suscribe y al Juzgado, solo toca examinar si el C. Presidente de la República ha obrado dentro de la órbita de sus facultades constitucionales, y si es evidente que si, supuesto que la calificación de cuando deba usarla y á la persona que deba aplicarla en la calidad de extranjero pernicioso queda á su propio juicio pudiera ejercerla por propia autoridad sin la concur-

rencia de ninguna otra y sin juicio previo, refiriéndose las garantías reclamadas á todos los casos ocurrentes con exclusion de cuando se ejercita la facultad que da al C. Presidente el artículo 33 de la Constitucion.

La suspension del acto reclamado no puede tener lugar, porque no cabe el amparo, y aquella procede en los casos de la ley de 20 de Enero de 1869, cuando hay que examinar si existe violacion de garantías, que no puede haber tratándose de un extranjero como confiesa serlo D. Amadeo Garibaldi.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar, que no procede el juicio de amparo ni menos la suspension del acto reclamado. México, Mayo 31 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia. México, Setiembre 18 de 1873.—*Herrera Campos.*

La sentencia pronunciada por el Juzgado primero de Distrito de México, en los juicios promovidos por varios Prébiteros, corresponde á los anteriores pedimentos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 19 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por D. José Soler contra la Orden del gobierno del Distrito que lo redujo á prision; vistas las constancias de autos que se refieren al caso, y considerando: que en virtud de esta disposicion, el presente juicio debió limitarse á solo el punto de la prision decretada por el gobierno del Distrito; que fué el único á que se contrajo el interesado, sin hacer dicho juicio extensivo al punto de expulsion de la República, sobre el que nada se ha promovido por Soler; y que en consecuencia la sentencia del Juez de Distrito que

lo amparó sobre tal expulsion, ha sido pronunciada contra ley expresa y oficiosamente; se decreta: Primero: Que se revoca la sentencia pronunciada en 26 de Julio próximo pasado por el juez primero de Distrito de esta capital, en la parte que ampara á D. José Soler contra el acuerdo del ciudadano presidente de la República, de 23 de Mayo último, que lo mandó expulsar de ella.

Segundo: Que se confirma dicha sentencia en la parte que niega el amparo contra la Orden de prision, expedida por el gobierno del Distrito.

Tercero: Que se saque testimonio de lo conducente y se remita al Tribunal de Circuito para los efectos de la responsabilidad á que se refiere la parte relativa del artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos, menos uno, respecto de los dos primeros puntos, y por mayoría respecto del tercero, lo decretaron los ciudadanos Presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*José María del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 18 de Setiembre de 1873.—Por ocupacion del ciudadano secretario, *M. Fernandez Villareal.*

Esta ejecutoria corresponde tambien á los anteriores juicios.